

Las restricciones al voto latino en Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2000-2012

Dra. Gabriela De la Paz Meléndez

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

e-mail: gdelapaz@itesm.mx

Generalmente se habla de la minoría latina como la de mayor crecimiento en Estados Unidos, pero al llegar las elecciones sorprende que no suele ser el voto definitorio, que el número de votantes es más bajo de lo esperado y que tampoco sus demandas políticas son atendidas, como ocurre con la reforma migratoria, por mencionar un caso notorio. Según la encuestadora Latino Decisions, en las elecciones de 2012, el electorado latino era de 11.2 millones de votantes y para el 2016 será de 13.1 millones (Barreto and Damore 2015).

A la fecha se han escrito numerosos libros y artículos sobre la organización o desorganización política de los latinos. Esta es una de las consecuencias del incremento poblacional de los latinos y la manera en que se proyecta en los números de votantes. Por ejemplo, Bill Clinton obtuvo el 7% del voto latino en 1996, que, entre otros factores, le permitió reelegirse cómodamente (Lopez and Taylor 2012). Aunque George W. Bush no tuvo la mayoría de sufragios latinos en las elecciones del 2000, por el hecho de que el estado clave fuese Florida apuntaló el interés por los latinos. Luego vendría el anuncio de la Oficina del Censo de los Estados Unidos que, basándose en los resultados de la encuesta nacional de 2000 declaró que, con 37 millones de personas los hispanos habían sobrepasado por primera vez a los afroamericanos como la minoría étnica más numerosa que contaba con 36.2 millones. Ahí mostraba una disparidad en el porcentaje de crecimiento que sería la regla en los años por venir: mientras que los latinos crecieron un 4.7%, los afroamericanos crecieron al 1.5%. Los blancos tuvieron un crecimiento todavía menor al situarlo en el 0.3% (Clemetson 2003). Con ello se abrió la puerta a la especulación del poder político del electorado latino.

Sin embargo, el supuesto poder político latino no se ha visto reflejado en la consecución de temas relevantes para esta comunidad, ni una presencia en altos cargos nacionales de los partidos políticos acorde a su proporción demográfica. La falta de una reforma migratoria integral y empática hacia los inmigrantes de origen latinoamericano es quizás el tema mejor conocido a través de los medios de comunicación y vemos como ni Barack Obama ha cumplido su promesa de lograr dicha reforma, ni el Congreso ha presentado una propuesta con posibilidades reales de ser aprobada. Por su parte, Krongstad y López afirman que las principales preocupaciones son la economía (59%), la asistencia médica (18%), el déficit del presupuesto federal (11%) y la política exterior (6%). Como veremos después, lo más relevante es que aparentemente no existe un costo político por romper una promesa al electorado latino (Krongstad and Lopez 2014).

Las razones por las que la comunidad latina se ha tardado tanto tiempo en lograr avances políticos son muy variadas y no serán discutidas en este artículo. Pero una de las claves tiene que ver con el voto en las urnas, además de la movilización política, que tampoco es nuestro tema. La población latina es muy diversa y agrupa tanto a residentes como a ciudadanos, pero los primeros no pueden votar, mientras que los segundos sí. También debe considerarse que el número de latinos que reúnen los requisitos para votar no es el mismo que de los que se registran para emitir su sufragio y todavía es menor la cifra de aquellos que emiten un voto el día de la elección. De todos los grupos étnicos, los latinos tienen el mayor crecimiento poblacional, pero el menor número de votos emitidos (Krongstad and Lopez 2014).

Por lo tanto, en este trabajo concentraremos nuestro análisis en la participación electoral de los votantes latinos en las elecciones presidenciales relacionándola con las leyes estatales electorales que podrían incrementar o disminuir la posibilidad de que un ciudadano latino pueda anotarse en el registro nacional de votantes. Es decir, trataremos de contestar a la siguiente pregunta: ¿cómo afectan las leyes estatales electorales en la participación electoral de los votantes latinos en las elecciones presidenciales? Por ello, primero ofreceremos un resumen general de las reglas electorales estadounidenses para comprender la complejidad del sistema electoral estadounidense y resaltar la importancia

del Registro Nacional de Votantes. Después estudiaremos los requisitos de prueba de identidad y de ciudadanía necesarias para obtener el registro como votante en cuatro elecciones presidenciales: 2000, 2004, 2008 y 2012. Nuestro estudio de caso será el estado de Colorado.

Para este análisis, por población en edad de votar entendemos las personas de 18 años en adelante. Por población elegible para votar entendemos las personas de 18 años en adelante que son ciudadanos estadounidenses. Por población votante registrada entendemos que se trata de las personas que se han registrado para votar. Por población votante o número de votantes entendemos que son las personas que dicen que votaron. Y por tasa de número de votantes entendemos la porción de la población elegible para votar que dice que votó.

Las reglas del sistema electoral.

A diferencia de México, en Estados Unidos no existe un instituto nacional que organice las elecciones. Desde el diseño de la Constitución se intentó debilitar y dispersar la autoridad gubernamental al entregar a los gobiernos y las legislaturas estatales la organización de las elecciones para senadores y representantes (Kernell and Jacobson 2003). Por lo tanto, cada estado elige por votación a un funcionario que se encargará de organizar las elecciones en su totalidad.

Todas las elecciones, sean locales, estatales o federales, se administran localmente por funcionarios o empleados del condado o de la ciudad, sin que exista un reglamento nacional que uniforme el formato de las boletas de voto o el mecanismo a través del cual se vota¹. Entre sus responsabilidades está la de registrar a votantes durante todo el año y determinar quién cumple con los requisitos para votar, según las leyes vigentes. Como parte

¹ Existen varios métodos para votar, pero la mayoría de las boletas son de escaner óptico. En muy pocos lugares persisten las máquinas donde los votantes giran una pequeña manivela junto a los nombres de los candidatos o el óvalo con la opción deseada para rechazar o aprobar un tema de alguna consulta ciudadana. Otra opción es la famosa máquina “perforadora de tarjetas” que causó controversia internacional en algunos condados de Florida en las elecciones presidenciales de 2000. Consiste en una tarjeta en la cual se hacen perforaciones junto al nombre de un candidato o la tarjeta se inserta en un soporte que la alinea con la imagen de una papeleta y entonces se hacen las perforaciones. Este procedimiento está siendo sustituido a lo largo de Estados Unidos gracias a provisiones de la Ley HAVA de 2002.

de la soberanía de los estados, estos funcionarios diseñan las boletas de cada elección, verificando la claridad de la redacción de los temas que serán sometidos a votación, así como que los datos de los candidatos estén correctos (89 Congreso de los Estados Unidos de América 1965). Asimismo, deben organizar todas las casillas y capacitar al personal contratado para el día de la elección general. Posteriormente, deben contar todos los votos y certificar la elección. Al cerrar las casillas a la votación en el conteo general de los votos deben incluir los sufragios que se realizaron mediante el procedimiento de votación temprana. A esto se le conoce como el voto popular, que determina cuáles electores del estado se presentarán a la reunión nacional del Colegio Electoral y a quién deberán elegir.

En Estados Unidos cada cuatro años se celebran comicios para elegir al Presidente y cada dos años se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, que tiene 435 escaños, más un tercio del Senado, que tiene 2 senadores por cada uno de los 50 estados. Para tal efecto se realizan dos tipos de elecciones: las primarias y las generales. Las elecciones primarias transcurren al interior de los partidos, ya que se utilizan para escoger al candidato que se presentará a las elecciones generales a partir de la Convención Nacional, que se realiza entre julio y septiembre, como la parte final de la elección primaria. Para ser aspirante a la Presidencia es necesario haber nacido en Estados Unidos², tener al menos 35 años cumplidos y haber residido en el territorio nacional un mínimo de 14 años.

Aunque tanto el partido demócrata como el partido republicano realizan elecciones primarias, hay algunas diferencias en estos procesos. Las fechas en que cada estado realizará la elección están determinadas por un calendario que administra la Comisión de Elecciones Federales y arranca desde los primeros días de enero hasta los últimos de junio. En esta parte del proceso se selecciona al número de delegados³ que apoyan a un determinado candidato para que asistan a la Convención Nacional de su partido para que ahí nominen al candidato que representan como el único de su partido para las elecciones generales. El partido republicano tiene un total de 2,286 delegados y para obtener la

² En caso de haber nacido en el extranjero, al menos uno de los padres debe haber sido ciudadano de Estados Unidos al momento del nacimiento. Los territorios en ultramar se consideran como suelo estadounidense.

³ Un delegado es una persona designada para representar a su estado en la convención nacional del partido.

nominación presidencial un candidato debe obtener 1,144 delegados. El número de delegados asignado a cada estado puede variar de una elección presidencial a la siguiente.

Por su parte, el partido demócrata tiene un sistema similar en el que combina el voto de las urnas con el de las asambleas partidistas o “caucus”. En estas últimas no se vota en una urna, sino que se vota a mano alzada en pequeños grupos de los cuales emerge un vencedor. En algunos estados se decide a los delegados por urnas y por caucuses, repartiendo los votos proporcionalmente o aplicando la regla de “el que gana se lleva todo”. En 2012 los delegados se repartieron de acuerdo a la proporción de votos que cada estado aportó al candidato demócrata en las últimas tres elecciones presidenciales, así como el número de votos electorales en el Colegio Electoral. Adicionalmente se otorgaron delegados extras a los estados con las fechas más tardías en el calendario de las elecciones primarias. Este partido cuenta con la figura del “superdelegado”, que son funcionarios electos (líderes del partido, congresistas) que representan al 20% del total de los delegados y que pueden decidir libremente su voto. En la elección de 2008 el total de delegados fue de 4,050 y se necesitaba conseguir el apoyo de 2,025 de ellos para obtener la nominación presidencial del partido demócrata (Kann and Teslik 2008).

Una vez que cada partido ha seleccionado a su candidato de acuerdo a los votos que los delegados emiten estado por estado, el candidato escoge al titular a la vicepresidencia y se inicia la elección general. Los comicios siempre se llevan a cabo “el primer martes después del primer lunes de noviembre”. Para poder votar es necesario ser ciudadano de Estados Unidos, estar registrado como votante en el estado de residencia y tener al menos 18 años. No obstante, esta acción no determina quién obtiene la Presidencia. El voto que emite el ciudadano por un candidato a Presidente se conoce como voto popular y, en realidad, el ciudadano está instruyendo al elector de su estado para que dirija su voto en el Colegio Electoral hacia la fórmula de presidente-vicepresidente que le ha señalado en la boleta.

El candidato que gana el voto popular en un estado consigue todos los votos del Colegio Electoral en ese estado. El total de votos electorales es 538 y están repartidos

proporcionalmente en los estados de acuerdo con la suma de delegados en la Cámara de Representantes y el Senado. El máximo es de 55 votos (California) y el mínimo 3 (Alaska). Los miembros del Colegio Electoral se reúnen en diciembre para votar directamente y en realidad es éste el resultado el que importa, mismo que debe ser más o menos similar al voto popular que emitieron los ciudadanos. Como se ha visto en las elecciones de 1824, 1876, 1888 y 2000 no necesariamente gana la presidencia el candidato que obtiene la mayoría de votos populares, sino quien consiga al menos 270 votos electorales.

La idea del Colegio Electoral nació debido a una preocupación de la élite estadounidense para evitar que algún mal candidato llegara al poder a través de la manipulación de la población. De ahí que los redactores de la Constitución idearan un complicado sistema electoral de democracia indirecta que les permitió vencer los retos de su época, entre los cuales se incluía cumplir con los intereses nacionales y locales al mismo tiempo y resolver la falta de comunicación entre poblaciones lejanas (De la Paz 2000). Posteriormente se aprobaron enmiendas para limitar el número de veces que se podía presentar un Presidente en funciones para reelegirse, entre otras cosas.

El Registro Nacional de Votantes

Es relevante conocer la historia del establecimiento del Registro Nacional de Votantes en vista de que muchos estados han aprobado leyes que dificultan que un votante se inscriba en dicho registro. Si el votante no puede inscribir sus datos, no puede votar. Como cada estado determina los requisitos para hacer válido un comprobante de domicilio, de nacionalización o ciudadanía, ciertos grupos de activistas ligados llevan a cabo campañas para registrar votantes. En algunos estados está permitido inscribirse en el Registro Nacional el mismo día de las elecciones, pero también se ha tratado de impedir que esto siga sucediendo.

Pese a que el voto es un derecho civil que en Estados Unidos se ha tomado como un hecho, la realidad histórica es que las minorías raciales y de género han votado hasta hace muy poco tiempo. Si bien la ratificación de las enmiendas XIV y XV a la Constitución que datan de 1868 y 1870 establecen que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los

Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos” (Sección 1 de la Enmienda XIV), así como que “el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado o disminuido por los Estados Unidos o por cualquier Estado debido a raza, color, o condición anterior de servidumbre” (Sección 1 de la Enmienda XV), los Códigos Negros impidieron que los ex esclavos ejercieran su derecho al voto mediante la comprobación de pago de impuestos, títulos de propiedad, exámenes de lectura, entre otros.

Posteriormente, las Leyes de Reforzamiento de 1870 y 1871, aprobadas durante la presidencia de Ulises S. Grant establecieron lineamientos para llevar a la práctica los derechos civiles de los afroamericanos. Dado que en los estados sureños los funcionarios públicos que deberían garantizar el derecho al voto, ser electo, participar como jurado, entre otros, eran los mismos que implementaban las prohibiciones legales o formaban parte del Ku Klux Klan (KKK), esta legislación permitía al gobierno federal intervenir cuando los estados no hacían lo correspondiente para garantizar la igualdad de los antiguos esclavos. También establecía multas y sanciones contra los servidores públicos que impidieran que una persona pudiera votar. Incluso permitía el uso de la fuerza para situaciones críticas. En la práctica, esta ley no se aplicaba en los estados sureños, precisamente aquellos con una mayoría de afroamericanos.

Por eso, la Ley de Derechos Electorales de 1965 impulsada por el Presidente Lyndon B. Johnson contenía provisiones para garantizar que los afroamericanos y otras minorías votaran en las elecciones. Entre sus principales disposiciones está una provisión para prohibir a los gobiernos locales y estatales que impongan leyes que tengan como objetivo la discriminación de las minorías étnicas.

La puesta en práctica de esta ley hizo evidente la necesidad de contar con una base de datos de los votantes a nivel nacional. Ello, con el fin de facilitar el registro de votantes y de uniformar las prácticas electorales de los estados. Así, en la década de 1970 se debatió sobre el registro de votantes a través de un formato enviado por correo postal, del registro

de votantes que prestaran sus servicios en las fuerzas armadas y estuvieran desplegados en el exterior, sobre instalaciones que permitieran el acceso de personas con alguna discapacidad física y los adultos mayores, así como la posibilidad de registrarse el mismo día de las elecciones (Crocker 2013). Estos esfuerzos sólo se plasmaron en leyes concernientes al registro de militares e instalaciones con acceso a personas de movilidad reducida⁴.

Finalmente, en 1993 se aprobó la Ley del Registro Nacional de Votantes (NVRA, P.L. 103-31, 107 Stat.77, [42 U.S.C. §1973gg et seq.]). Esta ley hizo obligatorio que los estados pusieran en práctica procedimientos para que los votantes se registraran para las elecciones federales. Además de procurar reglas para evitar fraudes con las identificaciones de los votantes, se aprobó que la gente pudiera registrarse para votar de las siguientes maneras: al mismo tiempo que se solicita una licencia para conducir, por correo y en determinadas oficinas locales y estatales de servicio al público. Con las medidas estandarizadas para votar, las violaciones a esta ley se convierten en delitos federales, tienen un costo mínimo de implementación para los estados (Crocker 2013).

Sin embargo, durante las sesiones de los Congresos 104 y 105⁵ se introdujeron propuestas para reformar la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 (H. R. 345) con el fin de prevenir los fraudes relacionados con la ciudadanía. Algunas propuestas fueron que los ciudadanos presenten un número de Servicio Social al registrarse para votar; que se presente una prueba de ciudadanía con el fin de registrarse para votar; permitir que los estados soliciten una identificación con fotografía para emitir un voto; repeler las provisiones de la NVRA sobre los votos por correo; cambiar las reglas de purga en la NVRA con el fin de hacer más fácil y menos oneroso para los estados purgar sus listas de registros de personas no elegibles; así como hacer opcional para los estados el requisito de

⁴ Ley de Acceso al Voto para los Ancianos y los Discapacitados (P.L. 98-435, 98, Stat. 1678) y la Ley de Votos Ausentes para Ciudadanos Uniformados y en Ultramar (UOCAVA) (P.L. 99-140, 100 Stat. 924).

⁵ El Congreso 104 sesionó del 3 de enero de 1995 al 3 de enero de 1997, periodo durante el cual el Senador republicano por Carolina del Sur, Strom Thurmond y el representante republicano del 6to. distrito congresional de Georgia, Newt Gingrich fungieron como presidente pro-tempore del Senado y vocero de la Cámara de Representantes, respectivamente. Por su parte, el Congreso 105 sesionó del 3 de enero de 1997 al 3 de enero de 1999 con Thurmond y Gingrich al frente del Congreso.

permitir a las personas registradas que han cambiado de domicilio que voten en la casilla de su viejo domicilio, la provisión de respaldo (Crocker 2013).

Posteriormente se aprobó la Ley Ayude a Estados Unidos a Votar⁶ de 2002 (HAVA, por sus siglas en inglés), como consecuencia tanto de la polémica elección presidencial de 2000 y de las nuevas medidas de seguridad necesarias a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001⁷. La HAVA consta de cuatro puntos importantes: (1) creó la Comisión de Asistencia Electoral y le transfirió las responsabilidades del registro nacional de votantes que hasta entonces tenía la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés) en relación al registro y mantenimiento de la forma de registro de votantes por correo y el reporte bianual del impacto de la NVRA; (2) especificó que cada estado debe implementar, de una manera uniforme y no discriminatoria una lista única, uniforme, oficial, centralizada interactiva y computarizada de registro de votantes a nivel estatal para que sea definida, mantenida y administrada a nivel estatal que contenga el nombre y la información de cada votante legalmente registrado en el estado y se le asigne una identificación oficial a cada votante legalmente registrado en el estado”, así como del mantenimiento de dicha lista de manera regular; (3) requiere que el número de la licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos del número de seguro social del solicitante aparezcan en todas las solicitudes de registro de votantes, así como el requisito de que la Administración del Seguro Social desarrolle una relación con el departamento de vehículos motorizados en cada estado para ayudarle con la verificación de la lista y (4) expandir las provisiones de respaldo de la NVRA al voto provisional (Crocker 2013).

La HAVA contiene provisiones para facilitar la organización de comicios por parte de los estados. Por un lado están los gastos para cambiar las máquinas de palancas y tarjetas perforadas, además de la Comisión de Asistencia Electoral para proporcionar asesoría técnica a los funcionarios locales a cargo de la administración de elecciones, y establecer normas sobre los dispositivos de votación con el fin de facilitar el proceso de emitir el

⁶ Help America Vote Act, HAVA.

⁷ Recordemos que algunos de los terroristas habían obtenido una licencia de conducir emitida por el estado de Virginia. Esto provocó que se endurecieran los requisitos para que los extranjeros adquirieran dichos documentos, independientemente de si los podían usar para presentarse a votar o no.

sufragio como métodos para impedir fraudes, así como capacitar al personal a cargo de organizar las elecciones. Cabe resaltar que la participación federal se limita a proporcionar herramientas para que los estados modernicen sus procedimientos electorales con el fin de contribuir a que más ciudadanos estadounidenses puedan votar.

No sólo las elecciones presidenciales de 2000 han tenido un impacto en la organización de los comicios, también los ataques del 11 de septiembre de 2001. Así, el Título II de la Ley REAL ID de 2005 modifica las condiciones en las que las agencias federales pueden aceptar licencias de conducir expedidas por los estados. Esto provocó cambios en los requisitos para obtener licencias de conducir varios estados, pues se introdujeron nuevas medidas de seguridad encaminadas a prevenir fraudes y se vinculó la obtención de dicho documento a que el solicitante presente un permiso legal vigente para su estancia en Estados Unidos (108 Congreso de los Estados Unidos de América 2005). Con este requisito se introdujo una prueba de ciudadanía que no había podido ser incorporada hasta entonces, ya que la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 se aprobó antes de la reforma migratoria de 1996 (Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante) y no contenía disposiciones relacionadas con la posesión de pruebas de un estatus legal del solicitante de una licencia de conducir, por ejemplo.

Desde 1993 prácticamente en todas las legislaturas se ha intentado modificar la Ley de Registro Nacional de Votantes, sin éxito. En todas ha habido discusiones e iniciativas de ley tendientes a hacer más riguroso el proceso de entrega y verificación de documentos que permitan acceder a dicho registro. Sólo se aprobó la Ley de Empoderamiento del Voto Militar y de Ultramar (MOVE, por sus siglas en inglés) (S. 1415, P. L. 111-84, 123 Stat. 2190) del 28 de octubre de 2009 que formaba parte de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional que enmendaba parcialmente la Ley de Votos Ausentes para Ciudadanos Uniformados y en Ultramar (UOCAVA) (P.L. 99-140, 100 Stat. 924) para cambiar ciertas leyes con respecto a los votos en ausencia y los procedimientos que aplican a los votantes militares en ultramar con el fin de facilitar su derecho al voto y enviar solicitudes tanto por correo como en formato electrónico (Crocker 2013). No obstante, como veremos más adelante, los estados han introducido medidas para inhabilitar el derecho al voto a

criminales o personas con antecedentes criminales.

La segunda parte analiza los requisitos de prueba de identidad y de ciudadanía necesarias para obtener el registro como votante en cuatro elecciones presidenciales: 2000, 2004, 2008 y 2012.

Estados Unidos, como una de las democracias más antiguas ha visto que el número de personas que acuden a las urnas disminuye elección con elección. En 1960 votó el 64% de los votantes, mientras que en 1996 la cifra bajó al 50%. Una de las razones es que el voto no es obligatorio, como en otros países, sino voluntario. Otra razón es que se han implementado medidas que dificultan que los nuevos ciudadanos, especialmente en distritos donde prevalece alguna minoría étnica, puedan registrarse para votar. Y una razón adicional es que muchos latinos, aún habiéndose registrado, no acuden a votar.

De acuerdo con el Instituto para el Liderazgo Hispano de Estados Unidos (USHLI, por sus siglas en inglés), el padrón de votantes latinos y su asistencia a las urnas ha ido en aumento, especialmente entre 1992 y 2008, pero hubo un retroceso en el último ciclo, 2008-2012. En los ciclos de las elecciones presidenciales de 1992-1996, se registraron 1.4 millones de nuevos votantes latinos, más un millón entre 1996-2000, para el ciclo 2000-2004 fue un incremento de 1.8 millones y 2.3 millones adicionales para 2004-2008 (Instituto para el Liderazgo Hispano de Estados Unidos 2012). Sin embargo, en el ciclo 2008-2012 el incremento volvió a ser de 1.4 millones. Desgraciadamente, el número de latinos que podían votar, pero decidieron abstenerse se incrementó en 2.3 millones, al pasar de 9.8 millones en 2008 a 12.1 millones en 2012 (Taylor and Lopez 2013).

El Programa de Protección al Voto del Proyecto de Avance publicó un reporte sobre la segregación a ciudadanos americanos en donde señalaba tres tipos de restricciones para votar en cerca de 16 estados de cara a las elecciones de 2012. Dichas restricciones estaban catalogadas en tres tipos: 1) Depuración de no-ciudadanos registrados para votar; 2) requisitos para comprobar la ciudadanía y 3) leyes restrictivas para las identificaciones con

fotografía (Advancement Project 2012). En este trabajo nos concentraremos en la depuración de las listas de no-ciudadanos para votar.

La depuración de no-ciudadanos registrados para votar fue adoptada o se intentó en 16 estados: Alaska, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Michigan, Nuevo México, Ohio, Tennessee, Texas, Utah y Washington. Para el 2010 había cerca de 5.5 millones de votantes latinos registrados en estos estados, de los cuales 1.1 millones son ciudadanos naturalizados, lo que los hace ser blancos de ser removidos de los registros si no presentan una prueba de que ya obtuvieron la ciudadanía. El sesgo también aplica para aquellos que, aún habiendo nacido en Estados Unidos pertenezcan a una familia de inmigrantes y, por ende, sean tratados igual que los naturalizados (Advancement Project 2012).

Sin embargo, no hay evidencia de un fraude masivo para votar llevado a cabo por inmigrantes, legalizados o no. El Advancement Project cita que desde el año 2000 se han recibido sólo 2,068 acusaciones de fraude y que sólo 56 o el 2.7% de estas acusaciones involucraba a un extranjero que intentara votar. Tan sólo en Florida se ha sancionado a una persona, mientras que los otros casos en ese estado o en Colorado y en Arizona fueron desestimados por las respectivas autoridades (Advancement Project 2012).

La fuente de datos para corroborar el estatus legal de los presuntos defraudadores es la Verificación Sistemática de los Derechos de los Extranjeros o SAVE, por sus siglas en inglés (Systematic Alien Verification for Entitlements). El SAVE proporciona ya sea el número de naturalización o certificado de ciudadanía, el número de la I-94 entregado como visa temporal al ingresar al territorio nacional, o un número de identificación de extranjería, de acuerdo con el tipo de documentación ingresada para extranjeros. La búsqueda por nombres no es confiable, dado que este sistema se maneja por números. Sin embargo, los estados que han usado el SAVE ingresan nombres para verificar la identidad del supuesto defraudador (Marouf 2012). De acuerdo con el censo de 2010, entre 2006 y 2010 se naturalizaron 1.1 millones de latinos. De éstos, tan sólo en Florida y Nuevo México son el

51% y el 65%, respectivamente, de la población total de personas naturalizadas (Advancement Project 2012).

No es asunto menor que se le pida una prueba de ciudadanía a una persona a pesar de estar registrada para votar. Cuando un funcionario le pide a una persona que aporte una prueba de su ciudadanía le está solicitando que proporcione un pasaporte emitido por los Estados Unidos, un certificado de nacimiento o un certificado de naturalización. Sin embargo, en 2005 el 7% de ciudadanos encuestados para un estudio del Brennan Center for Justice admitieron no tener acceso rápido a dichos documentos. Es decir, 16 millones de personas no pueden entregar una prueba de su ciudadanía cuando se les solicita (Marouf 2012). Con lo cual, se quedan sin votar. Cabe aclarar que, pese a que algunos estados emiten licencias de conducir sin condicionarlas a un estatus migratorio legal, la mayoría sí solicita documentos que comprueben que el solicitante es un residente permanente legal, pero este estatus indica que todavía no es ciudadano. Por lo que, cuando esta persona se presenta a votar ya habiendo obtenido la ciudadanía, pero con un documento de cuando era residente, es cuando se le solicita verificar su ciudadanía. Ver cuadro 1

Cuadro 1: Porcentaje de asistencia en las urnas para estados con restricciones al registro de votantes, 2012

Tipo de restricción	Estado	Porcentaje de asistencia a las urnas	5 Estados con el mayor porcentaje de votantes latinos
Depuraciones del padrón basadas en la ciudadanía o listas depuradas basadas en el cruce de datos del registro de vehículos motorizados y archivos de votantes	Colorado	71	14
	Florida	64	17
	Carolina del Norte	65.3	
	Tennessee	52.6	

Fuente: Advancement Project y NonProfit VOTE, 2012

El voto latino depositado en las urnas.

De acuerdo con el Pew Research Center, los latinos comprenden el 10.7% de los votantes a nivel nacional. Sin embargo, se concentran en determinados distritos, lo que disminuye su importancia para determinar una elección con su voto.

Como se puede apreciar en el cuadro 1, en Colorado los votantes latinos fueron el 14% del total de votantes. Este es un estado con una población latina importante, que incluso está situado en el tercer lugar de los estados con el mayor porcentaje de votos emitidos a nivel nacional en 2012 y donde se condujo una depuración de la lista de votantes basada en la comprobación de la ciudadanía.

Las conclusiones muestran una comparación entre la participación electoral de los latinos en las elecciones presidenciales seleccionadas y, como a medida que el voto latino se inclina hacia el partido demócrata, las restricciones para votar aumentan.

Bibliografía

- Clemetson, Lynette. *Hispanics Now Largest Minority, Census Shows*. 22 de Enero de 2003. <http://www.nytimes.com/2003/01/22/us/hispanics-now-largest-minority-census-shows.html> (último acceso: 7 de Julio de 2015).
- Lopez, Mark Hugo, y Paul Taylor. *Latino Voters in the 2012 Election*. Pew Hispanic Center, Washington, D. C.: Pew Research Center, 2012, 19.
- Crocker, Royce. *The National Voter Registration Act of 1993: History, Implementation and Effects*. Congresssional Research Service, Washington, D. C.: Congresssional Research Service, 2013, 36.
- 103 Congreso de los Estados Unidos de América. «Public Law 103-31-May 20, 1993.» *Government Printing Office*. 20 de mayo de 1993. <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-107/pdf/STATUTE-107-Pg77.pdf> (último acceso: 6 de julio de 2015).
- 108 Congreso de los Estados Unidos de América. «Ley de Asignaciones Consolidadas, 2005 (Ley de la Identidad Real).» *Government Printing Office*. 8 de diciembre de 2005. <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ447/pdf/PLAW-108publ144.pdf> (último acceso: junio de junio de 2010).
- 89 Congreso de los Estados Unidos de América. «Public Law 89-110 Voting Rights Act of 1965.» *Office of the Clerk of the U.S. House of Representatives Library*. 4 de Enero de 1965. http://library.clerk.house.gov/reference-files/PPL_VotingRightsAct_1965.pdf (último acceso: 10 de julio de 2015).
- Advancement Project. *Segregating American Citizenship*. Investigación, Advancement Project, Washington, D. C.: Advancement Project, 2012, 21.

Barreto, Matt, y David Damore. «Assessing Latino Influence in 2016.» *Latino Decisions*. 17 de Julio de 2015. <http://www.latinodecisions.com/blog/wp-content/uploads/2015/07/New-Latino-Threshold-2016.pdf> (último acceso: 20 de Julio de 2015).

De la Paz, Gabriela. «Democracia Imperfecta.» *El Norte*, 15 de Noviembre de 2000: 7A. Instituto para el Liderazgo Hispano de Estados Unidos. *Elecciones presidenciales-Capítulo tres*. 1 de noviembre de 2012. <http://almanac.ushli.org/chapters/chapter-three/> (último acceso: 9 de agosto de 2015).

Kann, Peter R., y Lee Hudson Teslik. «Backgrounder: The Role of Delegates in the U.S. Presidential Nominating Process.» *The New York Times*. 4 de Febrero de 2008. http://www.nytimes.com/cfr/world/slot1_20080204.html?pagewanted=all&_r=0 (último acceso: 19 de Agosto de 2015).

Kernell, Samuel, y Gary C. Jacobson . *The Logic of American Politics*. Washington, D. C.: CQ Press, 2003.

Krogstad, Jens Manuel, y Mark Hugo Lopez. «Hispanic Voters in the 2014 Election.» *Pew Research Center*. 7 de Noviembre de 2014. <http://www.pewhispanic.org/2014/11/07/hispanic-voters-in-the-2014-election/> (último acceso: 9 de Julio de 2015).

Marouf, Fatma. «The Hunt for Noncitizen Voters .» *Stanford Law Review Online* (Stanford University Press) 65, n° 66 (Octubre 2012): 66-72.

Taylor, Paul, y Mark Hugo Lopez. *Six take-aways from the Census Bureau's voting report*. 8 de mayo de 2013. <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/05/08/six-take-aways-from-the-census-bureaus-voting-report/> (último acceso: 12 de agosto de 2015).